

Octubre 29 y 30 de 1964

44ª REUNION — Continuación de la 4ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA

Presidencia del doctor **CARLOS H. PERETTE**, vicepresidente de la Nación, y de los señores senadores doctor **EDUARDO JOSE AGUSTIN GAMOND** y **ANGEL R. FREYTES**, presidente provisional y vicepresidente 1º del Honorable Senado, respectivamente

Secretarios: señores **CLAUDIO A. MAFFEI** y **CESAR ALBERTO RODRIGUEZ**

Prosecretario: señor **DELFOR W. CARESSI**

SENADORES PRESENTES:

ABDALA, Demetrio César
ABDALA, Felipe
ACUÑA, Ernesto N.
ACUÑA, Ramón Edgardo
AGUIAR VÁZQUEZ, Américo Ángel
AGUIRRE LANARI, Juan R.
ASTUDILLO, Félix E.
BARBICH, Adolfo A.
BASSI, Ricardo Alberto
BAUDUCCO, José Raúl
BERNARDO, Miguel Ángel
BLANCO, Rubén V. M.
CANTONI, Aldo H. N.
CAPRARO, Francisco
CASTIGLIONE, José F. L.
CORRADI, Luis Mauricio
DE REGE, Roberto
FASSI, Santiago Carlos
FERNÁNDEZ (h.), Mariano
FLORES, Domingo
FREYTES, Angel R.
GADANO, José Enrique
GAMOND, Eduardo José Agustín
GELSI, Celestino
GHIGLIONE, Alfredo Miguel
LÓPEZ, Jorge Oscar
LOVAGLIO, Dante A.
LUBARY, Ginés A.
MANCINI, Galileo

MARTÍNEZ, José Alberto
MARTÍNEZ GARBINO, Lucio José
MARTÍNEZ SARAVIA, Miguel A.
MORILLO, Carlos Argentino
OLMEDO, Rolando
OVANDO, Ricardo
RAMÍREZ, Lauro Francisco
RÍSPOLI ROMÁN, Enrique G.
RODRÍGUEZ, Eugenio L.
SALMÉN, Miguel
SAPAG, Elías
SNOPEK, Guillermo
TARDELLI, Antonio
VARELA DÍAZ, Diógenes
VITTI, Alfonso Andrés
ZINNY, Mario

AUSENTE, CON AVISO:

GONZÁLEZ FUNES, Tomás

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 2034.)**
- II.—Comunicaciones oficiales. (Página 2046.)**
- III.—Dictámenes de comisión. (Página 2046.)**
- IV.—Comunicación de comisión. (Página 2047.)**
- V.—Peticiónes particulares. (Página 2047.)**

- VI.—**Proyecto de resolución de los señores senadores Tardelli y Martínez Garbino sobre constitución de una comisión especial para la preparación de un proyecto de ley sobre fomento y defensa de la producción avícola nacional. (Página 2047.)
- VII.—**Proyecto de declaración de los señores senadores Bernardo, Astudillo, Olmedo y Salmén sobre obras del Frigorífico Terminal del Oeste Argentino, de Villa Mercedes, San Luis. (Página 2048.)
- VIII.—**Proyecto de ley del señor senador Rodríguez por el que se acuerdan subsidios a varias bibliotecas populares de la provincia de Misiones. (Página 2048.)
- IX.—**Proyecto de ley del señor senador Rodríguez sobre enseñanza obligatoria del cooperativismo en establecimientos educativos, oficiales y privados, de la Nación. (Página 2048.)
- X.—**Proyecto de ley del señor senador Martínez por el que se deroga el inciso d) del artículo 103 de la ley 12.148, de impuestos internos. (Página 2049.)
- XI.—**Proyecto de ley del señor senador Ghiglione sobre donación de terreno al Aero Club Argentino. (Página 2049.)
- XII.—**Proyecto de comunicación del señor senador Ríspoli Román por el que se piden informes al Ministerio de Economía sobre temas relacionados con la Secretaría de Estado de Comercio y la fijación del precio del azúcar. (Página 2050.)
- 2.—**Mociones: del señor senador Blanco para que se celebre sesión secreta en el día de mañana a las 10 para considerar pliegos de acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo; para que se comuniquen inmediatamente las sanciones efectuadas por el Senado hasta el día de mañana a las 24; para que inmediatamente después de la sesión secreta se celebre sesión pública para considerar los diversos asuntos que se resuelvan tratar por los presidentes de bloque, y para que se considere sobre tablas el proyecto de ley en revisión sobre prórrogas hasta el 31 de diciembre de 1964 de los gravámenes establecidos por la ley 16.451. Del señor senador Fassi para que se suspenda por tiempo indeterminado la consideración del proyecto de ley en revisión sobre intervención a la provincia de Santa Cruz. Se aprueban. (Página 2051.)
- 3.—**Continúa la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, en mayoría, en el proyecto de ley en revisión sobre derogación de normas penales. Se aprueba con modificaciones. (Página 2057.)
- 4.—**Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1964 los gravámenes a que se refieren los artículos 1º y 2º de la ley 16.451. Se aprueba. (Página 2073.)
- 5.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la entrega de diversos elementos que con carácter de donación fueron enviados a la República de Chile con motivo del desastre ocurrido en los meses de junio y julio del año 1960. Se aprueba. (Página 2074.)
- 6.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se promueve al grado inmediato superior al capitán expedicionario al desierto don Aníbal Aguirre. Se aprueba. (Página 2075.)
- 7.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se acuerda a don Horacio Day permiso para aceptar el cargo de cónsul de Finlandia en la provincia de Mendoza. Se aprueba. (Página 2076.)
- 8.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el decreto ley 5.177/58, relativo al Estatuto para el Personal de Policía de Establecimientos Navales. Se aprueba. (Página 2077.)
- 9.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se dispone la reimplantación del grado de inspector mayor en los cuadros de la Policía Federal. Se aprueba. (Página 2079.)
- 10.—**Consideración de los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en diversos proyectos de ley y solicitudes de pensiones y aumentos de pensiones. Se aprueban. (Página 2080.)
- 11.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión sobre aumento de las pensiones gratificables y aumento de las pensiones a deudos de legisladores y convencionales constituyentes nacionales. Se aprueba. (Página 2083.)
- 12.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Fassi por el que se modifican los artículos 10 y 11 de la ley 346, sobre carta de ciudadanía. Se aprueba. (Página 2085.)
- 13.—**Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda en el proyecto de ley del señor senador Martínez por el que se transfieren dos mil quinientos millones de pesos del «Fondo compensador de inversiones y acumulaciones» a la Dirección General de Préstamos Personales y con Garantía Real. Se aprueba. (Página 2087.)
- 14.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Se aprueba. (Página 2089.)
- 15.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles ubicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Se aprueba. (Página 2090.)
- 16.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por

Sr. Gelsi. — Que quede aclarado, señor presidente.

Sr. Fassi. — Puede consultar la versión taquigráfica.

Sr. Presidente. — Así es, señor senador.

3

DEROGACION DE NORMAS PENALES

Sr. Presidente. — La Cámara debe continuar con la consideración del dictamen sobre legislación represiva.

En consideración el artículo 1º, que se va a leer por Secretaría.

Sr. Fassi. — Se puede obviar la lectura, señor presidente, en razón de que todos los señores senadores tienen el texto en las bancas. Propongo que se enuncien los artículos.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

—Se enuncia el artículo 1º.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Señor presidente: no obstante la prolija búsqueda de decretos leyes represivos realizada por la Honorable Cámara de Diputados, se ha deslizado uno por error: no incluir el decreto ley 4.072/56 que prohíbe las actividades del Partido Socialista Revolucionario Nacional. Como entiendo que el propósito de la Honorable Cámara de Diputados es comprender en este despacho, sin ninguna exclusión, todas las prohibiciones en materia ideológica, propongo que se agregue el referido decreto ley.

Sr. De Rege. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege. — Yo había solicitado la palabra de conformidad con lo que había manifestado en la discusión en general: concretamente solicito que como artículo 1º se apruebe el siguiente, en reemplazo del actual: «Concédese amnistía amplia y general para todos los delitos políticos, comunes conexos o militares también conexos cometidos hasta la promulgación de la presente ley. Los beneficios de la amnistía comprenden también los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales o cuando se determine que bajo la forma de un proceso por delito común se encubrió una intención persecutoria de índole política o gremial. En razón de la amnistía concedida por este artículo, nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o molestado de manera alguna por intimidaciones o sospechas de haber cometido uno o más delitos a los que se refiere la presente ley.»

La fundamentación la he dado en la discusión en general, y, a efectos de abreviar tiempo, me

remito a ella. Solicito del honorable cuerpo la lectura de este artículo 1º con los alcances que en él se establecen.

—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo José Agustín Gamond.

Sr. Presidente (Gamond). — Se dará lectura por Secretaría al artículo propuesto.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Artículo 1º — Concédese amnistía amplia y general para todos los delitos políticos, comunes conexos o militares también conexos cometidos hasta la promulgación de la presente ley. Los beneficios de la amnistía comprenden también los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales, o cuando se determine que bajo la forma de un proceso por delito común se encubrió una intención persecutoria de índole política o gremial. En razón de la amnistía concedida por este artículo, nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o molestado de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido uno o más delitos a los que se refiere la presente ley.

Sr. Fassi. — Me veo en la necesidad de interrogar si es con desplazamiento del artículo 1º del dictamen de la comisión.

Sr. De Rege. — Así es, señor senador.

Sr. Fassi. — La comisión no acepta. Entiende que éste es esencialmente un dictamen derogatorio de las leyes que castigan los delitos de opinión y no una ley de amnistía que debió haber seguido el curso correspondiente como tal. Sería desviar y desvirtuar completamente el dictamen de su verdadero sentido si en lugar de ser derogatorio de las reglas penales represivas del delito de opinión se convirtiera en una ley de amnistía.

Y quiero insistir, señor presidente, en que yo también he formulado una indicación en el sentido de incluir entre los decretos leyes que se derogan al 4.072/56, que tiende a impedir la actividad política del Partido Socialista de la Revolución Nacional.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Señor presidente: nuestro sector, el de los Movimientos Populares Provinciales, en forma clara y precisa, en la sesión de ayer ha tenido oportunidad de expresar, tanto por intermedio del miembro informante de la comisión en minoría como por los senadores que hemos apoyado dicho despacho, que hemos considerado que esta ley, en principio, debía ser exclusivamente derogatoria de la legislación represiva anómala, agresiva y opresora de la libertad de pensamiento, e incluso ha creído que junto a esos decretos anómalos podrían estar incluidos todos aquellos otros que establecían discriminaciones colocando a unos argentinos en situación de superioridad frente a otros, calificando, en fin, a los ciudadanos en reprobos y elegidos.

Hemos considerado que no es sólo un mal sistema de legislar sino un pésimo sistema el de introducir modificaciones a los códigos de fondo por leyes especiales.

Ese criterio de nuestro sector no ha sido aceptado, y nos encontramos con un despacho venido de la Cámara de Diputados —por el que hemos optado— que introduce modificaciones de extraordinaria importancia al Código Penal, y al cual la mayoría del Senado le ha añadido delitos de tipo especial que tienden a tutelar incluso los deberes que impone la disciplina militar.

No veo, por ello, inconveniente alguno en que se agregue, al principio o al final de la ley, la cláusula de amnistía propuesta por el bloque demócrata cristiano. Al fin de cuentas, si es que esta ley ha de ser lealmente interpretada en su conjunto, lo único que tiene de unidad son sus propósitos de pacificación. No creo que esté en el espíritu de ningún legislador dictar normas penales con el único y exclusivo objeto de reprimir por reprimir; la represión por sí sola a nada conduce, según lo enseñan autores de la talla de Sebastián Soler. La finalidad principal de las leyes penales es tutelar algún bien jurídico. Por eso nada se opone a que en una ley de esta naturaleza, que trata de diversos temas, se incluya una cláusula de amnistía, sobre todo si se tiene en cuenta que el proyecto ha de volver en revisión a la Cámara de Diputados, por ser esto una resultancia necesaria de las adiciones propuestas por la mayoría.

Quiero señalar que la amnistía no es materia extraña, sino directamente relacionada con el derecho penal. La amnistía se da precisamente para hacer cesar el proceso originado en las normas represivas. No estamos, pues, apoyando la introducción de una cláusula de tipo civil dentro de las normas penales en consideración.

Si fuéramos a seguir un criterio demasiado ortodoxo, que es el que por mi parte propugnara, también habríamos de decir que dentro del despacho de la mayoría está de más la cláusula destinada a reprimir el ilícito o indebido enriquecimiento de los empleados públicos, que es imposible actuar con eficacia a través de una sola norma legal, ya que tal represión requiere toda una organización administrativa, un conjunto de normas armónicas que contemplen las distintas y variadas modalidades de tal enriquecimiento.

En cuanto al agregado propuesto al artículo 1º por el señor miembro informante de la mayoría, lo aceptamos con sumo agrado. Soy autor de un proyecto de ley presentado a este Senado que, precisamente, tiene por único y exclusivo objeto el hacer cesar la proscripción dispuesta contra el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Presenté ese proyecto cuando conocí la media sanción de Diputados que había omitido en su artículo 1º considerar esta ley anómala que lógicamente no puede

subsistir, cuando la Nación se encamina hacia su normalidad constitucional.

Con estas palabras dejamos sentada nuestra opinión aceptando en este caso ambos agregados propuestos y dejando expresada una vez más nuestra reserva sobre los aspectos generales y a salvo nuestro pensamiento sobre el fondo de esta cuestión, pues hubiéramos querido que la República Argentina en el día de la fecha tuviera la satisfacción de ver que esta legislación represiva anómala, agresora e inconstitucional, hubiera cesado de tener vigencia.

Sr. Presidente (Gamond). — Se va a leer por Secretaría el artículo 1º con el agregado propuesto por el señor senador Fassi.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Deróganse los decretos leyes y decretos 4.072/56, 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 1.607/63, 788/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63, 4.214/63.

Sr. De Rege. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege. — De conformidad a lo expuesto por nuestro bloque en la discusión en general, vamos a proponer que se agregue a este artículo 1º lo siguiente: «...las leyes 13.234 y 13.985 y toda disposición que establezca inhabilitaciones por razones políticas o gremiales». La fundamentación, como acabo de manifestarlo, ha sido dada en el debate en general.

Sr. Presidente (Gamond). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto?

Sr. Fassi. — La comisión no acepta por los motivos que se explicaron en el debate producido en la Honorable Cámara de Diputados. Justamente está muy avanzada en esa Cámara la discusión relativa a la derogación o reemplazo de esas leyes y nos parece inoportuno apresurar una sanción de esta especie cuando ese órgano legislativo ha hecho público que está estudiando a fondo la materia.

Sr. Martínez Saravia. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Martínez Saravia.

Sr. Martínez Saravia. — He pedido la palabra con el objeto de salvar escrúpulos de conciencia. Voy a votar afirmativamente la derogación de las llamadas leyes represivas, pero en este recinto se han vertido conceptos muy serios sobre las mismas. Los juristas las han calificado de leyes anómalas, de monstruosidades jurídicas, conceptos que dada mi falta de verificación en derecho no estoy en condiciones de entrar a rebatir ni juzgar a fondo, pero también se ha llamado a estas leyes liberticidas y atentatorias de los derechos del hombre. El decreto ley 4.161, que establece la prohibición de propaganda peronista y toda la otra legislación complementaria, han tenido un sentido. A pesar de que todos procuramos marchar en un camino de conciliación y de paz nacional, también es cierto que debemos hacerlo con un sentido de

justicia, sobre todo respecto de aquellos hombres que en una hora argentina, tratando de volcar lo mejor que tenían de sí mismos, lo pusieron en defensa de una causa. Quiero plantear el interrogante de si las leyes represivas son la causa de que hoy estemos viviendo este clima en que algunos sectores de opinión se sienten combatidos o si las leyes represivas no fueron producidas como consecuencia de que anteriormente se habían cometido hechos tremendos en que la ciudadanía vivió horas de persecución, horas en que se le negaron todos los derechos y que, como resultado de ellos y una vez que triunfó la Revolución Libertadora, debió buscarse el camino para superar esa época que fue considerada trágica para el destino argentino.

No deseamos entrar a reabrir procesos para enjuiciar, ni a describir lo que fue aquello; pero de ahí a aceptar que los que estuvieron en la revolución fueron los liberticidas y que los que estuvieron antes fueron los que dieron a la ciudadanía todas las libertades, es un capítulo que creo que merece considerarse con prudencia.

Quiero decir, y por eso es un descargo de conciencia que quería vertir en este recinto, que si en el año 1955 el senador que habla hubiera tenido la oportunidad de suscribir leyes represivas, lo hubiera hecho sin ningún cargo de conciencia pensando que se estaba procurando un camino de rehabilitación nacional.

Escuchar todo lo que se ha dicho en silencio me parece que es ser un poco injusto hasta con uno mismo y con los hombres que abrazamos una causa que, en su momento, significaba defender las libertades ciudadanas. Nosotros consideramos que hemos vivido diez años de opresión; luego del 56 otros sectores fueron los que se consideraron oprimidos. Ahora que estamos tratando de proyectarnos hacia el futuro, ahora que buscamos, en un clima de libertad, salidas para la patria, yo creo en la necesidad de la derogación de las leyes represivas.

He aprendido a conocer de cerca a los hombres que hoy militan en el justicialismo. No me asustaría en absoluto que mañana los hombres de aquella bancada, profesando ideas de justicia social, sintiéndose firmes en sus propios valores morales y espirituales, que les reconozco, gobernarán el país. Pero sí estaría dispuesto a acudir nuevamente a cualquier legislación represiva si algunos hombres de este país aceptaran vender sus conciencias y subordinarse incondicionalmente a cualquier tirano que pueda llevarnos a un destino imprevisible. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Yo creo en los hombres de mi República. Tengo un profundo sentido de respeto y de amor a mi pueblo. Pero los quiero en cuanto ellos son capaces de sostener sus propias ideas y sus propias decisiones, no cuando están esperando que sean otros los que resuelvan lo que ellos van

a hacer. El gobierno tiene una política sumamente clara y la sigue con firmeza. En este momento pareciera que hay sectores que están buscando la autoproscricción del peronismo y lo están haciendo con hechos como la colocación de bustos, con manifestaciones como las que leo en estos diarios: «Proscripción peronista»; «Se dice que el Congreso, en las próximas horas, por ley, resolverá la proscripción.»

Otras declaraciones hay acá del señor Vandor. Pero eso no lo vamos a hacer: no vamos a proscibir a los hombres que estén dispuestos a convivir en democracia. Estamos resueltos a jugarlos por las libertades de todos los argentinos. Entonces, no van a conseguir alterarnos. Pero cuando se piensa que se puede hacer la rehabilitación de este fenómeno que vivió la República, que para nosotros significó la tiranía, entonces —pido a mis colegas, a los hombres de buena fe de la República que lo hagan— debemos analizar las cosas y veremos que son un poco más complicadas.

Nosotros sentimos la frustración de diez años que vivimos bajo una tiranía. Ahí quedaron tremendas heridas. Hombres que están sentados en estas bancas, por ejemplo un senador de la Nación, representante de una provincia del Sur, era concejal y fue separado de su cargo por no cumplir con la doctrina nacional peronista, que era ley de la Nación. Nosotros queremos que a nadie se lo pretenda marcar con hierro vivo, marcar en rojo una sectarización, para que tenga el derecho a decir que está defendiendo la Nación. Estamos luchando por el derecho de todos, por el derecho igualitario. No queremos que se confundan las mentes argentinas; que se busque la autoproscricción o que intereses antinacionales pretendan que el juego armónico de la democracia en un momento se interrumpa; que se busque un frente, que se busquen combinaciones oscuras que pueden estar respondiendo a intereses espurios, en este momento en que el gobierno argentino, apoyado por todo el pueblo, ha rehabilitado para sí la riqueza petrolera y sus fuentes de energía. Hay gente e intereses a los que les aterra la paz interior en el país; hay gente a la que le molesta que esto sea posible, porque cada día de paz en la República es un paso al frente, y no lo es del partido sino de la Argentina.

Sr. Bassi. — ¡Muy bien!

Sr. Martínez Saravia. — Y sintiendo con este amor de patria que compartimos todos, tenemos que saber mirar en perspectiva.

¿Quiénes quieren que se destruya esta paz interna? ¿Los hombres de mi patria? No; no puede ser. Algún día despertará el gigante del Sur de Latinoamérica y se sentará a la mesa de los grandes del mundo. Y eso no es algo que se desea en otras partes. Eso es algo que hay que tenerlo postergado, y nadie debe prestarse a ese juego subalterno.

Nosotros estamos en otra cosa. Estamos en la construcción de lo grande. En mis palabras no pretende haber en absoluto un desafío ni una invitación a la lucha a otros sectores argentinos. Hay una invitación a la paz fraterna y a la comprensión del momento nacional. Si ellos se sintieron vejados y perseguidos de 1955 a 1964, otros sectores de la democracia argentina se sintieron vejados y perseguidos desde 1946 a 1955. La rehabilitación de estos fenómenos que rompen la fraternidad nacional puede ser nefanda para el futuro de la República. Yo quisiera que lo entendiéramos. Reabrir las etapas para considerar contemporáneamente que Perón fue malo o fue bueno, patrióticamente no lo consideramos oportuno. Por el contrario, vemos los fenómenos que pasan. Cuando se pone un busto hay una mano argentina que lo saca. Si mañana pretendemos que el triunfo justicialista sea imponer como héroes o próceres de la República a figuras por las cuales se sintió vejada gran parte de la ciudadanía argentina y aun muchos de los legisladores aquí sentados que estuvieron presos, perseguidos, o separados de sus cargos, consideraremos que hemos cometido un error al derogar estas leyes represivas. Nosotros lo hacemos con confianza, no como una muestra de generosidad del partido sino como una muestra de profunda fe en el hombre argentino, que no se va a dejar confundir y apreciará estas libertades en la medida en que ellas sirvan a la convivencia nacional.

Por eso, señores legisladores, midamos las cosas. Hay un gobierno y un pueblo que marchan en pos de su futuro, y hay sectores interesados que todos los días quieren perturbar la paz de la República. El gobierno será de las mayorías y nosotros estamos dispuestos a jugarlos con un sentido de democracia y de libertad, pero esto lo vamos a hacer en la medida en que nadie se sienta con derecho a negar a otros sectores de la República su democracia y su libertad. Es un sentido integral de república, de patria, de paz, de hermandad, que tenemos que interpretar así.

Con estas aclaraciones he querido ser consecuente con mi lucha de hombre joven. Ingresé en un partido político allá en el año 1945, ya sintiendo que tenía una misión que cumplir, porque experimentábamos una opresión, que sería justa o no, pero que no quiero entrar a debatir en este momento. En los años 1952 y 1953, cuando veíamos dividirse a la familia argentina, porque había hijos y réprobos, estuvimos dispuestos a cualquier lucha. Y no puedo silenciar en este momento ni cargar con todas las culpas a aquellos que dictaron estas leyes represivas, leyes que no fueron las causas básicas sino la consecuencia de una hora de opresión nacional.

Con esto, señor presidente y señores senadores, quiero dejar perfectamente aclarado el sen-

tido de mi voto. Lo hago por la afirmativa, pero de ninguna manera acepto que estas fueran leyes liberticidas, hechas con espíritu tiránico, sino que fueron dictadas como la necesidad nacional de un momento para tratar de restablecer la libertad, la democracia y la paz entre los argentinos. Creo que ahora, felizmente, esas cosas, con la comprensión de todos, han sido superadas, y tengo la gran satisfacción de poder votar afirmativamente, con confianza en la Argentina, con confianza en la oposición y en nuestro pueblo, la derogación de las leyes represivas. (Aplausos.)

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Nuevamente voy a agradecer la libertad que nos acuerda nuestro reglamento al permitir que el debate en particular sea libre.

Las palabras pronunciadas por el señor senador preopinante no pueden quedar sin una condigna respuesta. Creíamos que a través de la derogación de las leyes represivas especiales y anómalas podríamos hacer un debate levantado que estuviera a la altura del prestigio de este Honorable Senado. Desgraciadamente, parece que no va a poder ser así. No es nuestra la culpa si invocándose nuestra buena voluntad de construir el futuro se vuelve constantemente al pasado para reabrir un proceso y dirimir responsabilidades, ya que entonces hemos de estar siempre en la lucha y no vamos a poder llegar a la ansiada paz.

No voy a entrar en profundidad al formular la réplica. Me limitaré, en esta instancia y oportunidad, a decir que rechazamos de un modo categórico y terminante todo el juzgamiento que ha realizado el senador preopinante, y nos vemos precisados a expresarlo de un modo claro y contundente, e incluso sin salirnos de la materia que ha originado este debate.

La República Argentina es signataria de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el decreto, o digámoslo con más claridad, para no aludir a un solo decreto, el 4.161, sino toda esa serie de decretos que trataban de poner la policía ya no en los actos sino en el pensamiento de los hombres, está en pugna y es contraria a esa Declaración de los Derechos Humanos.

Esta sola enunciación bastaría para decir que esa legislación excepcional no puede justificarse en ningún instante ni bajo ningún concepto. Se trata más bien de una legislación adecuada para imponerla a los enemigos en épocas de una guerra franca, y no para establecer reglas entre hermanos y hombres de un mismo país.

El radicalismo del pueblo, a través de sus representantes en el Parlamento argentino y de muchas declaraciones, ha manifestado que no desea que en este país haya réprobos y elegidos. Por eso las palabras que se acaban de pronun-

ciar, y cuyo eco todavía sentimos, provocan angustia y un doloroso desencuentro, poniendo una nota triste y de desaliento en este ambiente que vive la República. La situación de una república no se juzga por lo que hagan grupos aislados, un par o un grupo de ciudadanos. No se juzga la marcha de un país por lo irregular, anormal, y extraordinario. No se puede juzgar al país por aquellos que alguna vez obran perdiendo la razón o no sometiendo a los dictados de la prudencia. El país se juzga por lo que hace la gran mayoría y malo es tomar el ejemplo de unos pocos para juzgar a muchos.

Pero ante las palabras que se han pronunciado y que estoy juzgando, aun mordiéndome los labios y poniendo frenos a mi pensamiento, me obligan a decir que en este país no puede existir libertad si no ponemos primero las bases de la igualdad. Este es un pensamiento que ya expresó Mariano Moreno, numen de la Revolución de Mayo en esos días aurorales y que perdura porque está aún sin cumplirse.

Uno de los más graves males que padece la República es que no practica una democracia auténtica; la democracia que vivimos no es real y nosotros aspiramos de corazón a perfeccionarla, para darle la verdadera jerarquía institucional y ética que debe tener como sistema de vida. Y digo que no es auténtica porque está falseada por las proscripciones que han puesto tacha al proceso de normalización constitucional. Tacha que sería insalvable si es que entre los diversos sectores de la opinión pública no se hubiera logrado un consenso para concurrir a unos comicios que tenían muchísimos defectos y graves transgresiones incluso desde el punto de vista fundamental, pero que hemos debido superar para llegar a estas horas y a estos momentos.

¿Vamos a volver al análisis para atrás, nuevamente, a reabrir el pasado? ¿Hemos de volver a abrir las heridas? ¿Hemos de volver nuevamente a fomentar las discordias que separan a los argentinos; que un senador ha de decir que Perón es un tirano y que otro —como yo— pueda contestarle que Perón es un patriota? ¿Vamos a volver a decir que aquello fue la felicidad y que lo posterior no lo fue? ¿Hasta cuándo? ¿Seguiremos siempre con lo mismo? ¿Por qué no dejamos esto, señor presidente, para que en las horas presentes lo falle el pueblo en elecciones libérrimas, sin proscripciones de ninguna naturaleza, y esperaremos después el fallo definitivo de la historia que será inexorable para aquel pasado como lo será también para nosotros?...

Estamos leal y honestamente con la pacificación. Por eso no alargaremos este debate. Por eso no contestamos las palabras que se acaban de pronunciar como hubieran sido nuestros deseos y nos limitamos a expresar que las rechazamos, realizando ese rechazo con espíritu argentino, con cordialidad, con verdadera fraternidad, con corazón de hermanos, para que nos

dediquemos a la labor fecunda que exige el quehacer nacional.

Sólo cerebros y manos ocupadas —se dijo alguna vez— han de salvar al mundo de los graves problemas que lo afligen. Entreguémonos con reflexión y profundidad a nuestra labor legislativa, a estudiar los grandes problemas que tanto reclaman nuestra atención y que pide el pueblo que se solucionen. Y en esa tarea nos vamos a encontrar todos, aunque tengamos diversas opiniones. Porque, señor presidente, y en esto es en lo único que coincido con el señor senador preopinante, podrán separarnos a nosotros muchas cosas, podrá haber diferencias de criterio, de doctrina, de conceptos, pero a todos debe unirnos la patria. Si esto no es así, señor presidente, estamos, al menos por ahora, perdidos, definitivamente perdidos.

Nada más. (Aplausos.)

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Señor presidente: debo formular una aclaración. Al negar que entre en el debate en particular la ley de amnistía, de ninguna manera estamos sancionando a los que por aplicación de las leyes represivas están sufriendo alguna condena, si los hay. Porque de acuerdo con el artículo 2º del Código Penal vigente en esta materia, una vez derogada esta legislación represiva todas las penas que se han dictado en su virtud quedarán también extinguidas, de tal manera que en el espíritu de esta ley el efecto que requiere la amnistía se apunta con mayor extensión, porque el artículo 2º en ese sentido es terminante y claro.

Sr. Presidente (Gamond). — Se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por el señor senador Fassi.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se vota y aprueba el artículo 2º.

—Se enuncia el artículo 3º.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — De conformidad con algunas de las modificaciones que anuncié en mi exposición en general en la sesión de ayer —y que a su pedido pasé por anticipado al señor presidente del bloque de la mayoría—, voy a solicitar que en este artículo 3º, por los fundamentos que di oportunamente en el día de ayer, se agregue como segundo párrafo del artículo 210 la frase «por el solo hecho de ser miembro de la agrupación». La redacción quedaría así: «Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que participare en agrupaciones permanentes o eventuales que sin estar comprendidas en el caso anterior tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas, por la

fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la agrupación.» Repito que propongo este agregado como segundo párrafo del artículo 210 por las razones que expresé ayer, en el sentido de que me parece mucho más propio incluirlo allí, como una forma de asociación ilícita, y no dentro del artículo 213, como viene proyectado en el despacho de la mayoría.

Sr. Presidente (Gamond). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

Sr. Fassi. — No, señor presidente, y voy a fundar esta posición.

Creo atinada la observación del señor senador preopinante, porque indudablemente nacen en nuestro espíritu grandes dudas sobre la ubicación que corresponde a este inciso. Parece que no hay que romper la unidad del artículo 213 bis, porque todos sus incisos obedecen a una misma concepción. Con el mismo criterio, señor presidente, también en el inciso 2º se estaría tomando en cuenta otra figura delictiva que se opera por organizaciones. Quiere decir que también tendríamos que incluirlo como un nuevo apartado del artículo 210. Finalmente, este artículo apunta a otra especie de coparticipación según he aclarado en la discusión en general. Apunta al copartípepe delincuente que forma organizaciones o bandas con el objeto de delinquir mediante delitos comunes, y aquí, por el contrario, se trata de personas que en sí no son delinquentes, pero que en su fanatismo proselitista no se conforman con extender sus ideas por medio de procedimientos intelectuales y de captación pacífica, sino que acuden a la violencia. De manera que son una especie distinta de personas alcanzadas por el delito penal y que, en consecuencia, no se pueden confundir dentro del mismo artículo. En cambio, en nombre de la mayoría, acepto incluir en el primer inciso del artículo 213 bis el párrafo que aconseja el señor senador preopinante, es decir, «por el solo hecho de ser miembro de la agrupación».

Quiero agregar, señor presidente, por si estamos considerando todo el artículo, que en el inciso 2º voy a proponer un agregado de dos palabras.

Sr. Aguirre Lanari. — ¿Si me permite, señor senador, con permiso de la Presidencia? Hice la aclaración nada más que con respecto al inciso 1º, porque tengo observaciones que hacer con respecto a otros incisos.

Sr. Fassi. — Entonces, será preferible tratar exclusivamente el inciso 1º, con las consideraciones que he expresado precedentemente. Es decir, no estoy conforme con el cambio de ubicación, pero acepto que se agregue al final del artículo 213 bis, inciso 1º, las expresiones propuestas por el señor senador Aguirre Lanari: «por el solo hecho de ser miembro de la agrupación».

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — En esta oportunidad vamos a ratificar las observaciones e impugnaciones que hicimos al dictamen de la mayoría en su tratamiento en general. El señor senador que ha solicitado el agregado que actualmente acepta la comisión, permite ciertamente centrar el tema en su verdadera significación.

Por el artículo 213 bis, inciso 1º, se trataría de reprimir como asociación ilícita la actividad de quienes tuvieren por objeto imponer sus ideas, ya que la determinante «por la fuerza o el temor», en mi concepto —y surge de la redacción de este inciso 1º del artículo 213 bis que se propone y está en consideración—, estaría destinada sólo a combatir las ajenas.

Sr. Aguirre Lanari. — De ninguna manera, señor senador. No me haga decir lo que no he manifestado.

Sr. Snopek. — Estoy expresando conceptos personales y mi modo de interpretación...

Sr. Aguirre Lanari. — No es mi interpretación.

Sr. Presidente (Gamond). — Ruego al señor senador no interrumpir sin solicitar previamente la venia de la Presidencia.

Sr. Snopek. — Señor presidente: lo que he dicho con respecto al señor senador de los partidos del centro es que él, al propugnar que este artículo se agregara como segunda parte del artículo 210 del Código Penal... ¿No es así, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Efectivamente.

Sr. Snopek. — ...había enfocado el problema en su verdadero alcance, porque esto sería entonces una suerte de asociación ilícita distinta de la que reprime el artículo 210 del Código Penal. Sería la persecución de la asociación por motivos ideológicos.

Sr. Aguirre Lanari. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Snopek. — Sí, señor senador.

Sr. Aguirre Lanari. — Yo entiendo, y quiero que quede expresamente aclarado para que no se pueda interpretar mal mi pensamiento, como evidentemente le ha ocurrido al señor senador y puede haber dudas en otros espíritus, puesto que el párrafo que habla «por la fuerza o temor» cubre todo el artículo, de manera tal que queda expresamente aclarado que no estoy persiguiendo las ideas por sí mismas, sino cuando se trata de imponerlas por la fuerza o el temor, que es lo que dice el artículo. De modo que, repito, deseo que quede perfectamente aclarado mi pensamiento sobre el particular, y le ruego al señor senador que no insista en adjudicarme un pensamiento que no tengo. Nada más, señor senador, y muchas gracias.

Sr. Snopek. — Si el señor senador me hubiera escuchado en la exposición en general que realicé el día de ayer, recordará que expresé que la redacción de este artículo era desgraciada y poco feliz. El pensamiento expresado por el señor senador preopinante no está claramente manifestado en la letra. Para que el artículo que está en consideración fuera interpretado con el sen-

tido y con el alcance que ha expuesto el señor senador preopinante, tendría que estar redactado en la siguiente forma, en su parte final: «...tuvieren por objeto imponer por la fuerza o el temor sus ideas o combatir las ajenas».

Sr. Aguirre Lanari. — Yo no me opongo, señor senador.

Sr. Snopek. — En la forma en que está redactado actualmente resulta que «por la fuerza o el temor» exclusivamente afecta a «combatir las ajenas». Este error en la redacción se presta a la interpretación —que por mi parte ex profeso he realizado— en virtud de la cual la letra del artículo podría traicionar sus propósitos. Dicho esto, que puede tomarse como un aspecto superficial, pasaré a otro problema, que estimo es más de fondo. Ayer manifesté que el delito que se trata de reprimir con esta norma está considerado en el artículo 210 del Código Penal, que castiga a la asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos en general, y que los castiga por el solo hecho de ser miembros de la asociación. Vale decir que todas las formas de restricción ilegítima de la libertad penadas por el código, encuentran en el artículo 210 su castigo por el solo hecho de ser ejecutadas por una banda con independencia de la tentativa o del delito a la libertad que se cometiera. El artículo 210 da la fórmula para reprimir en general toda suerte de asociación ilícita.

De lo contrario, señor presidente, nos encontraríamos frente a un fenómeno curioso: que mientras el Estado argentino ha erigido en delito a la asociación o banda en sí, ha dejado de lado al individuo, a quien no pena. Según el pensamiento de la mayoría, al individuo aislado le es lícito y permitido usar el temor o la fuerza para imponer sus ideas o para combatir las ajenas; sólo sería punible si se asocia con otros. A esa necesaria consecuencia lleva el despacho de la mayoría.

La tarea más honda, la tarea filosófica del legislador, es reflexionar antes de dictar la norma obligatoria de carácter general; el juego de las dos Cámaras que integran el Congreso tiende a obtener esa mayor reflexión. He reflexionado sobre este artículo, y entiendo que, de sancionarse el texto que propone la mayoría, va a resultar ese fenómeno curioso de castigar la asociación ilícita por lo que al individuo personalmente le está permitido, porque todavía no hay en el Código Penal una figura autónoma, por ejemplo en el capítulo de los delitos contra la libertad individual, que reprima esa acción. Vale decir que no existe ningún artículo que diga que el que por la fuerza o el temor tratare imponer sus ideas o combatir las ajenas será reprimido con tal o cual pena. No existe la pena para el delito individual, y estamos contemplando solamente el caso de banda o asociación. Es curioso. Se castiga la acción en conjunto, pero no la individual. Se trata de un error grave que cometemos por legislar apresuradamente, porque si no se acepta esto que estoy sostenien-

do, es evidente que el artículo está de más. Si existe la represión individual en el Código Penal, basta con el artículo 210, porque como lo expliqué ayer, trayendo en mi apoyo la opinión de respetables autores, éste es un delito que se pena con independencia de la tentativa o la ejecución del delito individual. Siempre la asociación ilícita en la vida real se da en concurso, y no existe *per se*. Entonces, si en el Código Penal argentino existe la figura jurídica que pena al individuo, la norma está de más. Si no existe, con mayor razón está de más, porque entonces habríamos penado la asociación como ilícita sin haber previsto previamente el delito de tipo individual.

Sr. Fassi. — Pido la palabra..

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Una regla de hermenéutica jurídica que ilustra la interpretación de las leyes es que éstas nunca contienen soluciones absurdas, y el señor senador hace un esfuerzo tremendo para hacerle decir a la ley un absurdo, es decir que se castiga al grupo de personas que tengan por objeto imponer sus ideas. ¿Pero qué juez, qué intérprete de la ley va a dividir el párrafo para afirmar que lo que quiere castigar es la imposición de las ideas cuando siguen el camino de la licitud? En realidad, el párrafo está unido por medio de una conjunción disyuntiva, una u otra cosa, imponer las ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. De manera que no tenga duda el señor senador de que todos los que tengan que interpretar esta ley se darán cuenta de que lo que se trata de reprimir es la imposición de las propias ideas o el combate de las ajenas por la fuerza o el temor. De lo contrario, llegaríamos nosotros, insisto, a una interpretación absurda. Se sorprende el señor senador de esta figura delictiva, y yo me pregunto en qué mundo vivió en los últimos cuarenta años, si no vio la eclosión del nacional-socialismo en Alemania, si no conoció la historia del fascismo en Italia, si no conoció las actividades del Ku-Klux-Klan en los Estados Unidos, si no ha visto surgir el movimiento Tacuara en la República Argentina.

Yo no sancionaría la conducta individual del hombre que, sin incurrir en el delito, pretende imponer sus ideas a los otros hombres, porque tengo un sentido de la dignidad del hombre argentino, y entiendo que éste no puede ser individualmente presionado por otro hombre, porque no merecería el nombre de argentino si se encontrara en esa situación de inferioridad. Lo que hay que tratar de evitar es otra cosa: que no se formen organizaciones para infundir el temor, porque entonces no se trata del enfrentamiento de un hombre contra otro hombre, sino de una organización delictiva enderezada a impedir la formación libre de las ideas del ciudadano singular. Hay aquí, en consecuencia, una diferencia de peligrosidad que

no se ha advertido. No es igual la peligrosidad de un sujeto tratando de infundir violentamente sus ideas a otros, que la peligrosidad de un conjunto de sujetos organizados para obtener el mismo resultado. Además, se incurre, en la expresión que hemos escuchado, en un error manifiesto, al sostener que en todas las oportunidades en que hay asociación ilícita se presenta en concurso con un delito determinado. Yo diría que recorriendo todos los autores, veremos que se puede o no presentar en concurso, porque —vuelvo a insistir en un concepto que he dado en el debate en general— no es un delito de resultado, y el delito particular que podría cometer es un delito de resultado. En cambio, éste es un delito de peligro. Basta la circunstancia de que se asocie un grupo de delincuentes para robar para que hayan incurrido en el delito previsto en el artículo 210, aun antes de cometer su primer robo. Bastará que se forme un grupo de gente que se disfraze con uniformes, que se lance por las calles de Buenos Aires a vociferar que van a quemar los negocios de las personas que no comparten sus ideas o van a golpear al que no piense como ellos, para que sea necesaria la actividad represiva, porque nadie tiene que arrogarse el ejercicio de la fuerza e infundir el terror para impedir la libertad de conciencia y la profesión de las ideas de los demás ciudadanos del país.

De tal manera que pretender combatir esta disposición no es vivir en el presente siglo, es ignorar las experiencias italiana y alemana; es ignorar algunas realidades de los propios Estados Unidos de América y lo que ha pasado en nuestro propio medio, en qué hemos visto irrumpir en las casas de estudios grupos vandálicos para realizar verdaderos actos de fechoría. No solamente hay que esperar, en defensa del orden público, que el acto de fechoría se realice. Si la organización tiene ese objeto, es necesario castigar a sus miembros por el solo hecho de participar en ella.

A mí me sorprende lo que creo es una verdadera dualidad de conducta y que no atribuyo a nadie. Formulo una simple consideración. Nos espanta cuando el agente policial interfiere en el libre curso de las ideas de los ciudadanos, pero estamos conformes con que un grupo de particulares forme una verdadera organización de gendarmes para obtener los mismos fines. Yo no quiero la fuerza organizada del Estado tratando de intervenir en el terreno de las ideas, pero tampoco quiero la de los particulares si pretenden seguir el camino de la fuerza y del terror.

Estas son las razones por las cuales insistimos en el primer inciso del artículo que hemos proyectado.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — No han sido inútiles mis palabras. Han tendido a despejar la incógnita de cuál era el espíritu que animaba a esta norma legal.

Indudablemente que no acepto y rechazo de plano que haya yo vivido fuera del mundo en estos últimos cuarenta años. Sin duda que he visto, al menos a través de las noticias, los fenómenos anómalos que han constituido las bandas o asociaciones extremistas de toda índole: las fascistas, las nacionalistas, el Ku-Klux-Klan. Vale decir que se trataría, a través de este artículo, de reprimir un delito de carácter político.

Yo he insistido en que la redacción no es feliz, y sigo haciéndolo, no obstante que se diga que la hermenéutica llega al absurdo.

Acepto, con el señor miembro informante, de que evidentemente ningún juez sensato va a condenar al que se proponga imponer sus ideas por medios pacíficos. Pero antes de la condena hay un proceso previo que es de sí ya un agravio. Dije ayer que la autoridad policial, para detener a una persona, no necesita tener la plena configuración del delito: le bastan los indicios vehementes. Le basta un conjunto de sospechas que den la sombra del delito, para que el ciudadano sea detenido. Y ya se inicia el sumario de prevención o policial, que demora todo el tiempo necesario para la investigación previa, regularmente un plazo de treinta días, que es de por sí una pena. Luego de ello es elevado a la justicia que, indudablemente, no sólo no marcha con el ritmo que todos deseamos, sino con una habitual y triste morosidad. Y allí, al juez penal, luego de recibir la declaración del imputado, le basta, para mantener la prisión preventiva, la mera configuración de datos que den las características fundamentales del delito o lo que se conoce en el lenguaje tradicional como la semiplena prueba.

La redacción poco feliz, la redacción imprecisa del artículo, puede llegar, más cuando se trata de perseguir un delito político, a consecuencias enormes y desastrosas, y ello sin hacer una declaración que conduzca al absurdo. El vocablo «o» en este caso puede ser interpretado en la forma que se le ha dado en este debate; pero puede ser interpretado también en forma diferente. No hay ley del mundo que pueda asegurar que nuestros jueces son infalibles, ni hay tampoco resorte humano que garantice que los jueces han de proceder en todos los casos de conformidad con el espíritu y la intención del legislador.

Se ha dicho alguna vez que la ley es más sabia que el legislador. Sí, muchas veces es así, pero otras tantas la ley es más ignorante y más torpe que el legislador, particularmente cuando es manejada por hombres que no observan la debida imparcialidad y rectitud en el ejercicio de su función.

La República Argentina no puede garantizar a los ciudadanos que sus jueces sean infalibles,

estudiosos, científicos y ni siquiera que sean imparciales. Y en este país, como ya lo hizo notar Rivarola hace más de medio siglo atrás, el que tiene más poderes es el juez de instrucción. A mérito de este artículo basta que alguien, al sostener sus ideas —incluso dentro del espíritu que ha querido darle la mayoría— trate para imponerlas el anunciar que el no seguimiento de las mismas puede ocasionar una desgracia, para que esto pueda ser tomado por el juez como temor y ese hombre ser conducido inmediatamente a prisión y sometido a proceso. Llegamos así a este absurdo: si en estos tiempos no tuviéramos los alcances del progreso que experimentamos, el inventor de una vacuna podría ser puesto preso de inmediato si él, para imponer la idea de la bondad de esa vacuna, llega a decir que su no aplicación puede ocasionar una desgracia colectiva. Ello se debería a que prima facie la policía podría interpretar que se ha dado la modalidad del temor para imponer una idea. Y el juez de instrucción podría dictarle prisión preventiva al inventor de la vacuna por la misma razón, sin cometer por ello un juzgamiento aventurado o apresurado, porque el que trata de imponer la idea provocando un temor está reprimido por el precepto que se postula.

He examinado estos aspectos así, en general, e incluso sobre hechos comunes para que podamos ver los riesgos que presenta la norma legal proyectada.

En el aspecto político se llega a consecuencias peores. El delito ideológico vuelve a manifestarse, no ya en su expresión individual —al estar al espíritu del miembro informante— sino en un sentido colectivo. El pensamiento del hombre siempre tiende a trascender, a comunicarse con los demás. La idea es el más poderoso vehículo que tiene el hombre para comunicarse con sus semejantes e incluso para trascender en el tiempo. Vale decir que esta norma legal ofrece en su redacción extraordinarios riesgos, es extremadamente peligrosa.

Antes de finalizar, desearía aclarar algo que me ha adjudicado indebidamente el miembro informante de la mayoría.

Teóricamente, el delito de asociación ilícita puede existir en forma independiente, pero la vida real lo muestra siempre en concurso, porque la autoridad descubre la organización y tiene la prueba de que existe cuando ella o la banda ha preparado, o cometido delito. Vale decir que concurre el delito, o con la tentativa o con el hecho delictivo. Pueden verse los repertorios de jurisprudencia y no se va a encontrar casi ningún caso de haberse penado la asociación ilícita por sí. Y acepto, y es un argumento más en favor de la tesis que por mi parte he sostenido en el debate en general, que efectivamente el de asociación ilícita no requiere el resultado, porque es un delito de

peligro, que se pena por el solo hecho de formar parte de la asociación.

Eso me da la razón en el sentido de que para la seguridad colectiva e incluso para reprimir las fechorías y malandanzas de las asociaciones delictivas en lo político, basta la norma del artículo 210 del Código Penal. Prueba de ello es que existen numerosos casos de jurisprudencia en que la autoridad judicial se ha servido de esta norma para reprimir los actos de bandas organizadas, a veces armadas, que so color de la finalidad política han cometido hechos delictuosos.

Con estas palabras dejamos ratificado que vamos a votar en contra del dictamen de la mayoría en lo que se refiere al inciso 1º) del artículo 213 bis.

Sr. Presidente (Gamond). — Por Secretaría se va a dar lectura al texto del inciso 1º) con la modificación propuesta por la comisión.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembros de la agrupación.

Sr. Snopek. — ¿Va a cambiar la redacción en cuanto a imponer por la fuerza o el temor?

Sr. Fassi. — No. Queda igual. La comisión admite que agreguemos al final «por el solo hecho de ser miembros de la agrupación».

Sr. Presidente (Gamond). — Así se ha leído por Secretaría.

Sr. Aguirre Lanari. — Creo que para clarificar todavía más el texto, y para aventar cualquier duda de las que se han expuesto aquí, que es-timo han quedado suficientemente explicadas con la fuerza de una interpretación auténtica, que, por más que no tenga fuerza jurídica, si la tiene evidentemente en el ánimo del juez, podríamos agregar una coma después de la palabra «ajenas».

Sr. Fassi. — Sí, señor senador. Yo lo entendí así, cómo no: «las ajenas, por la fuerza». La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Gamond). — Se va a leer por Secretaría la redacción definitiva del inciso.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas, por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembros de la agrupación.

Sr. Fassi. — Conforme, señor presidente.

Sr. Presidente (Gamond). — Se va a votar el inciso 1º tal cual ha sido leído por Secretaría.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia el inciso 2º y dice el

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Voy a proponer que se redacte en la siguiente forma el principio del párrafo, agregando la frase «por el solo hecho de ser miembro de las mismas» y se agregue también la palabra «públicamente» antes de «realizaren propaganda», de modo que el inciso quedaría así redactado: «los que participaren en organizaciones por el solo hecho de ser miembros de las mismas o públicamente realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial en cualquier forma».

Es un resguardo que me parece oportuno.

Sr. Fassi. — La comisión insiste, pero agregando dos palabras. En el último párrafo, después de las palabras «promoción de la discriminación» se agregaría «religiosa o» y continuando el párrafo en la forma que está redactado.

Sr. Presidente (Gamond). — Por Secretaría se va a leer el inciso en la forma como ha sido propuesto por el señor miembro de la comisión.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Los que participaren en organizaciones, o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa o racial en cualquier forma.

Sr. Presidente (Gamond). — Se va a votar el inciso 2º tal cual ha sido leído por Secretaría.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se lee el inciso 3º y dice el

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Voy a solicitar que luego de la frase que dice «los que incitaren a la violencia» se agregue «por la sola incitación», para mantener, señor presidente, una concordancia con lo que dice el artículo 209 del Código Penal que se refiere a la instigación para cometer delitos, el cual también exige este requisito.

Sr. Fassi. — De acuerdo, señor presidente, la comisión acepta.

Sr. Presidente (Gamond). — Se va a leer por Secretaría el inciso 3º como queda redactado.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Los que incitaren a la violencia, por la sola incitación, o realizaren actos de violencia sea individualmente o integrando organizaciones, contra cualquier raza o grupo de personas de otra religión, origen étnico o color.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — La he solicitado a los únicos fines de dejar constancia de que personalmente estoy en desacuerdo con la redacción propuesta. A pesar de que considero que es loable y plausi-

ble la finalidad que se persigue con el artículo, no estoy de acuerdo con la forma en que ha sido redactado y que puede ser objeto de persecución política o ideológica. Por ese motivo votaremos en contra del agregado estimando que es más precisa, en cuanto a su finalidad, la redacción de la norma pertinente votada con ese fin por la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Gamond). — Se va a votar.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el inciso 4º.

—Se enuncia el artículo 4º.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gamond). — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: este artículo tiene su fuente en el proyecto Soler, que atenuaba la pena en su párrafo final. Por eso solicitaré, conforme con la misma fuente, que se agregue al final una frase que diga: «En este caso se aplicará la pena disminuida, conforme a lo dispuesto por el artículo 44.»

Sr. Fassi. — La comisión acepta porque ésa es efectivamente la fuente, y en ésta aparece una atenuación de la pena.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — También en este caso, por las razones que hemos expuesto en el debate en general, vamos a votar en contra de esta norma penal. Hemos expresado ayer que ésta es una norma extraordinariamente peligrosa, y que la finalidad de castigar a los gestores de revolución, a los conspiradores de oficio, a los que van a golpear a las puertas de los cuarteles...

Sr. Fassi. — Estamos en el artículo 4º, señor senador. El inciso 4º ya se votó.

Sr. Snopek. — Creí que estábamos en el inciso 4º. De todas maneras dejo formuladas estas salvedades por nuestro voto negativo en cuanto al inciso 4º del artículo 3º de este proyecto.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, doctor Carlos H. Perette.

Sr. Presidente. — En consideración el artículo 4º, con el agregado aceptado por la comisión. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Artículo 4º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente: Se aplicarán así mismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gente, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 4º, tal como se acaba de leer por Secretaría.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 5º.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — De conformidad con lo que también adelanté en el día de ayer con respecto a mi creencia de que conviene completar este artículo en base a distintos antecedentes de derecho comparado que ahora voy a citar, solicitaré que el artículo quede redactado así: «Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación, los emblemas de una provincia argentina o la bandera, el escudo o el himno oficiales de un Estado extranjero». Los antecedentes en que me baso, entre otros, son los siguientes: en cuanto a la concordancia con respecto al menosprecio de los emblemas provinciales, dije ayer que en Suiza eso era castigado en lo que hace a los emblemas cantonales, y en el código alemán, país federal como Suiza y el nuestro, existe una disposición similar.

En cuanto a las concordancias respecto a restricciones cuando se trata de emblemas extranjeros, podemos citar el caso del código suizo en su artículo 298, que habla de emblemas extranjeros enarbolados públicamente por un representante oficial de ese Estado; el código griego, que exige en su artículo 155 la reciprocidad; el código alemán, que se refiere a aquellos enarbolados públicamente por un representante o en virtud de disposiciones legales o de uso constante; el código italiano en su artículo 299, que habla de la bandera oficial usada de conformidad con el derecho interno, y también existen antecedentes de esta disposición que sugiero en los proyectos de Peco y Soler.

Advertirá así mismo la Honorable Cámara de que cuando hablo yo de escudo o himno me estoy refiriendo expresamente a los oficiales. En suma, la disposición que propongo, en lo que respecta a las provincias argentinas, no hace sino reconocer la parte que históricamente les corresponde dentro del proceso de nuestra estructuración constitucional, y en lo que respecta al escudo o himno oficial de un Estado extranjero, la sugerencia que traigo se basa en razones elementales de política internacional.

Nada más.

Sr. Presidente. — Está en consideración el agregado que propone el señor senador Aguirre Lanari con respecto al artículo 5º, incorporando escudos y símbolos provinciales y también extranjeros. La comisión deberá pronunciarse sobre la reforma propuesta.

Sr. Ovando. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — ¿Es para referirse a la proposición del señor senador?

Sr. Ovando. — No, señor presidente.

Sr. Presidente. — Entonces la comisión deberá pronunciarse previamente sobre las reformas propuestas. Mientras la comisión resuelve, le concedo la palabra al señor senador Ovando.

Sr. Ovando. — Señor presidente: quiero dejar expresa constancia de mi total desacuerdo con la magnitud de la pena que se aplica en este artículo.

Entiendo, señor presidente, que el ultraje hecho a la bandera, al escudo o al himno nacional es ultraje al país, al sentimiento nacional y, por consiguiente, no puede tener una pena de uno a cuatro años, que generalmente se materializará con tres o cuatro días de detención. Para este tipo de delito estimo que debe aplicarse una pena mucho más severa.

Tampoco estoy de acuerdo con que se castigue únicamente a los que proceden en contra del himno, del escudo o la bandera en forma pública, sino que también la penalidad debe extenderse a todos aquellos que infaman los símbolos en privado, porque el castigo del delito, señor presidente, se hace a la peligrosidad del sujeto que lo comete, y el hombre que ultraja a la bandera públicamente es menos peligroso que aquel que lo realiza en privado. En consecuencia, entiendo que la penalidad debe extenderse también a aquel que así procede.

Nada más.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — He hecho una breve consulta con el señor senador Fassi, quien me ha adelantado algunos problemas que podría traer mi proposición en lo que respecta a los emblemas extranjeros. Por ello, la voy a retirar, señor presidente, porque considero que, efectivamente, pueden surgir algunos peligros en países como los nuestros; pero en lo que respecta a la observación que hizo el señor senador Ovando, yo creo que efectivamente tiene mucha razón en que merece igual pena de infamia, el que pública o privadamente ultraja la bandera. Pero me permito plantear el problema, que se me ocurre en este momento, de si cuando hablamos de «privadamente» no podemos abrir una puerta peligrosa que se preste a la persecución en base a una imputación calumniosa. Lo dejo a la consideración de la Cámara y a la meditación de los señores senadores.

Sr. Castiglione. — Al contrario: estoy de acuerdo en que es posible probarlo.

Sr. Aguirre Lanari. — Es posible probarlo, pero resulta dificultoso, y mientras tanto a cualquiera le pueden cargar el sambenito de una actitud como ésta. De manera que lo dejo a criterio de los señores senadores.

Sr. Snopek. — Tiene razón el señor senador preopinante sobre la posibilidad de cargar culpas de un delito injustamente o, como él ha dicho con frase más vulgar pero más expresiva, de «cargarle el sambenito» de este delito. Ya la historia nuestra sabe de estas cosas.

Por esas razones yo propongo que se suprima la palabra «públicamente». Quedaría entonces el artículo en esta forma: «...al que ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación».

Sr. Ríspoli Román. — El señor senador Fassi ha manifestado que deseaba escuchar todas las objeciones posibles para contestarlas como miembro informante. Por ello, estando de acuerdo con lo expuesto por el señor senador Ovando, entiendo que, por lo menos, debiera incluirse un agregado para que este tipo de delitos no sea susceptible de condena condicional. Evidentemente esta proposición agrava la pena que se solicita para tales hechos.

Sr. Aguirre Lanari. — Yo insisto, señor presidente, con relación a los emblemas de las provincias argentinas; he retirado únicamente lo que se refiere a los emblemas de Estados extranjeros.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Trataré de responder rápidamente a las objeciones formuladas, pero quiero llamar la atención de los señores senadores, porque estamos casi al final del período parlamentario, y si seguimos dedicándole a esta ley tanto tiempo, no podremos cumplir con lo que el país espera de estas últimas horas de sesión.

Es cierto que tanto en el proyecto Peco, como en el proyecto de 1937, como en el proyecto de 1960, se establecían como delitos típicos y diferenciados el ultraje a los símbolos nacionales y el ultraje a los símbolos extranjeros. El primero afecta el honor y la dignidad de la República, y el segundo la paz que debe mantener con las naciones extranjeras. Pero entiendo que esta segunda parte nosotros podemos reservarla para la ocasión en que reformemos el Código Penal, y ocuparnos ahora de lo que es más urgente, el ultraje a los símbolos nacionales.

Con respecto al ultraje a los símbolos nacionales, me parece muy interesante —y no figura en ninguno de los proyectos que he consultado— esta mención de los emblemas de las provincias argentinas. Si queremos defender un sano federalismo, debemos considerar que no sólo se nos agravia cuando se ofende a los símbolos nacionales, sino también cuando se ofende a los símbolos provinciales, y en ese sentido la comisión expresa su conformidad, sobre todo considerando que este cuerpo es representativo de las autonomías provinciales.

Pero debo decir, señor presidente, que no me inclino por la solución que propone el señor senador por Tucumán de suprimir la condena condicional. En todo este proyecto se sigue el criterio del arbitrio judicial y no del arbitrio legal; es decir, no se confía la severidad de la pena

exclusivamente a la ley, sino que se da un amplio margen al juez para que compute las circunstancias, y en este delito como en otros, nosotros observamos que las penas pueden ir desde uno a cuatro años. Si hay penas menores, es decir de uno a dos años, en el que puede corresponder la condena condicional, ¿por qué le vamos a quitar ese instrumento de equidad al juez para el caso de algún supuesto en que el ultraje, más que el propósito de ofender al símbolo nacional, pueda ser el producto de la ignorancia o la precipitación propia de la pasión y no ir totalmente enderezado a ese objeto? Sin embargo, de alguna manera, debe merecer una sanción. Por eso me inclino, y en todos los delitos hemos seguido ese criterio, por establecer mínimas bajas y máximas altas para que los jueces, como hombres y frente a circunstancias también humanas, contemplen la posibilidad de ser benignos o no, y para que dentro de este criterio de benignidad tengan la oportunidad de la condena condicional.

Por lo tanto, quedan aceptadas para ser incluidas en el artículo 222, a continuación de las palabras «himno de la Nación», las siguientes: «...o los emblemas de una provincia argentina».

Yo quiero aclarar otra cuestión, porque no sé si he interpretado bien las expresiones del señor senador por Corrientes. El ultraje al símbolo nacional no sólo alcanza a los símbolos oficiales sino a todos, aun a los privados. Una bandera es argentina por tener los colores de la patria y no puede ser ultrajada aunque sea una bandera privada.

Sr. Aguirre Lanari. — Le voy a aclarar su duda y me remito a la versión taquigráfica...

Sr. Fassi. — Me basta la palabra del señor senador.

Sr. Aguirre Lanari. — Muchas gracias. Cuando yo me referí al término oficial, y por otra parte lo dice así el proyecto que le facilité al señor senador, lo hice en relación a los del Estado extranjero.

Sr. Fassi. — Muy bien. Queda aclarado y no tengo nada más que agregar.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura al artículo 5º con el agregado propuesto, que ha aceptado la comisión.

Sr. Secretario (Maffei). — (Leyendo):

Artículo 5º — Agrégase como segunda parte del artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2 del libro segundo) lo siguiente:

Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el Himno de la Nación, o los emblemas de una provincia argentina.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncian y aprueban los artículos 6º, 7º y 8º. Al leerse el artículo 9º, dice el

Sr. Flores. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — En el tratamiento en general hice algunas observaciones relacionadas con el enriquecimiento de los funcionarios públicos, criticando el texto del despacho de la comisión. He preparado un nuevo texto sobre la forma que a mi juicio tendría que revestir esa figura delictiva. Rogaría que por Secretaría se proceda a su lectura, para dar luego las explicaciones del caso.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura por Secretaría a la modificación propuesta por el señor senador Flores.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Artículo 2682. — Será reprimido con prisión de seis meses a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años el que directamente o por persona interpuesta para disimularlo, obtuviere durante el desempeño de su cargo o empleo público o dentro de los tres años siguientes de su cesación en el mismo, un aumento considerable de patrimonio manifiestamente desproporcionado con sus recursos lícitos públicamente conocidos o declarados ante las autoridades competentes, a menos que justificare en el respectivo proceso criminal la legitimidad de ese aumento.

La acción penal por este delito no podrá ser deducida sin que, como medida previa, el imputado haya sido requerido por la autoridad administrativa que determine la ley o por el juez competente en la causa para que exp'ique la procedencia o comprobante de su enriquecimiento. Para los efectos de este artículo se presume, salvo prueba en contrario, ilícito el aumento patrimonial de la característica establecida y los recursos que no provinieren de algunas de las siguientes causas:

- a) Emolumentos legales del cargo;
- b) Ejercicio de función u oficio o actividad lícita compatible con el ejercicio del cargo;
- c) Aumento de valor o acrecentamiento natural de los bienes que se tenían al asumir el cargo o que se adquirieran lícitamente con posterioridad al producido o rentas de esos mismos bienes;
- d) Herencia, legado o donación por causa extraña a la función;
- e) Ejercicio de derechos legíticamente adquiridos.

La prueba del enriquecimiento que ofrezca el imputado se conservará secreta a su pedid y no podrá ser invocada contra él para ningún otro efecto. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a tres años.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — Señor presidente: el texto que acaba de leerse con la nueva redacción que propongo al artículo 268² implica que participo de la idea de la comisión en el sentido de que es conveniente introducir en el Código Penal una disposición que incrimine como delito el enriquecimiento ilícito del funcionario. Concido en cuanto a la pena aplicable, y con respecto a que la prueba del enriquecimiento se conserve se-

creta, y también sobre lo previsto respecto a la persona interpuesta, salvo una pequeña reducción en el máximo de la pena que se fija para la persona interpuesta que contribuye a disimular el enriquecimiento.

Mi discrepancia fundamental reside en el hecho de que se considera delictuoso. Estoy completamente en desacuerdo con el criterio de la comisión, aun cuando la misma ha seguido muy respetables precedentes doctrinarios, como la opinión de tratadistas como Soler. El aspecto principal de la figura delictiva, según el despacho de mayoría, es el requerimiento y la subsiguiente falta de prueba para cualquier enriquecimiento. Creo que hay que centrar la atención en el fin que persigue la ley, en el hecho censurable y delictuoso fundamental, que es el aumento inmoderado del patrimonio. Pero pienso, como ya lo adelanté en la discusión en general, que no es posible considerar directamente como sospechoso cualquier aumento patrimonial de cualquier monto, aunque sea mínimo. En el texto propuesto por la mayoría de la comisión, está comprendido cualquier aumento de cualquier monto.

En varios de los antecedentes que recuerdo se emplea un calificativo respecto a ese enriquecimiento que justificaría la represión. En el proyecto de Peco se habla del aumento «apreciable» de patrimonio; en el dictamen de la mayoría de la Comisión de Legislación Penal de Diputados se habla del aumento «excesivo» de patrimonio; Soler, si mal no recuerdo, usa las expresiones aumento «considerable», o incremento «considerable», y en otro antecedente —no tengo bien presente si es en uno de los decretos leyes que hemos derogado— se habla del aumento o incremento «importante».

Creo que es perfectamente útil agregar al-
gún concepto que fije mejor la naturaleza de ese incremento patrimonial que resulta sospechoso.

A los términos empleados en los proyectos a que me he venido refiriendo les encuentro el defecto de que resultan demasiado imprecisos: apreciable, considerable, importante o excesivo, son conceptos no precisos; ya están indicando que no es el aumento mínimo, cualquier aumento, pero tienen una elasticidad excesiva y no fijan ningún criterio para determinar cuándo ese aumento es excesivo, apreciable o considerable.

En este sentido, pienso que conviene indicar ese criterio en la ley, y hacerlo siguiendo casi diría la apreciación de la opinión popular sobre cuándo se considera que hay una presunción de enriquecimiento deshonesto, cosa que sucede, por ejemplo, cuando el patrimonio del funcionario es manifiestamente desproporcionado en relación a sus recursos lícitos públicamente conocidos. Allí, en ese elemento, creo sí que hay una base firme y sería para considerar que el aumento patrimonial a que se refiere la dispo-

sición legal tiene todas las características de sospechoso.

Dentro del texto que propongo a la consideración de la Cámara se tiene en cuenta como elemento fundamental del delito el enriquecimiento con esas características, elemento que debe ser plenamente acreditado por la acusación, y en su caso por la sentencia, para que pueda considerarse que existe tal enriquecimiento punible. Quiere decir que se suprime como elemento del delito el requerimiento a que se refiere el proyecto de la comisión. Se mantiene exclusivamente como un requisito de la acción, de tal manera que tenga el imputado una garantía mayor de que en su patrimonio los aumentos que haya tenido son conocidos por la autoridad, y entonces pueda hacer la investigación del caso con conocimiento pleno de esos elementos patrimoniales que pueden justificar su aumento.

Mi proyecto, en este aspecto, al centrar la atención de la ley sobre el punto material del incremento patrimonial con estas características, guarda semejanza con el proyecto de Peco, que también prescinde del criterio del requerimiento como elemento del delito. Se aparta luego de él en cuanto trata de precisar, en la mejor forma posible, cuál es el criterio que seguirá la autoridad que investigue para establecer las características del enriquecimiento deshonesto.

A su vez, como adelanté en el tratamiento general, considero que no es conveniente la norma proyectada por la comisión en cuanto incrimina el delito tanto durante el desempeño de la función pública como posteriormente sin limitación en el tiempo. El enriquecimiento sospechoso, reprimible como acción deshonesto del funcionario, es el que se materializa durante el término de desempeño de la función, y en un determinado plazo posterior a la cesación en el cargo, con lo que se impediría que fácilmente se oculte el aumento patrimonial exteriorizándolo inmediatamente después de la cesación.

Con respecto a la forma de justificación que pueda tener el imputado para comprobar que su enriquecimiento patrimonial no obedece a causas ilícitas o deshonestas, me parece oportuno que la ley fije cuáles son los recursos que se consideren lícitos; y en este sentido el texto propuesto sigue en líneas generales el proyecto Peco, y tiene también en cuenta otros antecedentes legislativos sobre la materia.

Resumiendo, diré que considero que con un texto como el que he sometido a la consideración de la Cámara queda perfectamente determinada la actividad delictual que se trata de reprimir, precisados sus alcances, sus elementos constitutivos, y a la vez se ofrecen las garantías necesarias para la aplicación de una norma penal justa, sin peligros de que se pueda

aplicar con propósitos de persecución de ningún orden.

Este es el criterio general que inspira el texto que he proyectado: que pueda haber una represión adecuada pero que el imputado tenga las debidas garantías de defensa. De este modo, en la acusación se cumplirá con el criterio general que debe imperar en todos los delitos en materia penal, es decir que quien acusa debe comprobar los elementos fundamentales de la infracción penal.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Trataré de ser brevísimo, señor presidente, porque de lo contrario lo que resta del período de sesiones va a ser ocupado exclusivamente en la consideración de este asunto. Ello no significa dejar de reconocer el mérito de las observaciones formuladas por el señor senador y de ponderar el esfuerzo que realizó para redactar un nuevo texto del artículo 268².

La comisión no lo acepta, y expreso que lo hace con sumo pesar; pero en rigor no es posible aceptarlo en una improvisación de recinto. Yo lo comparo en este momento, señor presidente, por ejemplo, con el proyecto Peco relativo a los acrecimientos patrimoniales que deben considerarse lícitos y observo a primera vista que el enunciado hecho en el texto propuesto por el señor senador no es completo, porque excluye el inciso e) del artículo 324 del proyecto de Código Penal de Peco, que también comprende entre las fuentes del enriquecimiento lícito los hechos fortuitos. Eso no lo enumera el señor senador.

Quiere decir, señor presidente, que si en una materia como esta cometemos un error en la determinación de la licitud, por una improvisación de recinto, estaríamos colocando en la condición de punible una conducta que sin embargo es honesta. De haber tenido más tiempo podríamos haber examinado con mayor detenimiento el proyecto que nos presenta el señor senador, y tal vez habríamos asentido. Pero basta el argumento que he dado para que la comisión se aferre al despacho y no acepte la modificación propuesta.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — Yo creo, señor presidente, que las dos reformas sencillas que voy a proponer han de merecer la aprobación del sector de la mayoría, y de esta manera recojo algo de lo que ha propuesto el señor senador Flores, que, por otra parte, ya lo había anunciado también en mi exposición en general de ayer.

En primer lugar propongo subsanar un defecto de técnica jurídica, cuando en el artículo 268¹ se habla del Código Penal. Dentro de la técnica, basta con enumerar el artículo; así que propongo concretamente que se supriman las pa-

labras «del Código Penal». Estamos reformando el Código y éste se refiere a sí mismo aquí.

Sr. Fassi. — Tiene razón el señor senador. La comisión acepta.

Sr. Aguirre Lanari. — La segunda modificación consiste —y no voy a insistir en ninguna otra consideración porque ha sido suficientemente expuesto hace unos momentos— en que agreguemos la palabra «apreciable», de acuerdo con lo que dice Peco, después de «enriquecimiento patrimonial», en el artículo 268^º.

Sr. Fassi. — En el anteproyecto preparado por el doctor Núñez y en el proyecto del Poder Ejecutivo deliberadamente se ha suprimido la palabra «apreciable» porque se ha considerado que el funcionario público debe ser honesto totalmente y no puede justificarse ni aun el pequeño delito que lo enriquece.

Sr. Aguirre Lanari. — Con el agregado no quiero justificar un pequeño delito.

Sr. Fassi. — Estoy explicando los argumentos para sostener el dictamen de la comisión tal como había sido proyectado, sin atribuirle por cierto ese propósito.

Yo he pensado sobre esta circunstancia del monto del enriquecimiento y me inclinaba por sostener el mismo criterio porque considero que cuando se trata de un enriquecimiento pequeño es muy fácil de justificar. Pueden ser ahorros de los emolumentos corrientes o el resultado de algún azar o circunstancia que puede presentarse normalmente en la vida y no requerir una documentación fehaciente y terminante. Sucede lo mismo que en las rendiciones de cuentas con los pequeños rubros que tampoco exigen de parte de los jueces una justificación de la misma fuerza. Sin embargo debo ponderar, en favor de la modificación que se propone, la circunstancia de que es la que siguen, en sus grandes líneas, los proyectos más prestigiosos y, en consecuencia, en nombre de la comisión acepto el agregado que acaba de proponer el señor senador por Corrientes, es decir, el agregado de la palabra «apreciable».

Sr. Flores. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — Comprendo la inspiración de algunas de las apreciaciones del señor miembro informante de la mayoría, pero observo que el concepto de «apreciable» me parece demasiado indeterminado. Por eso yo proponía que se calificara el aumento patrimonial, sea con la palabra «apreciable» o «considerable» que yo sugería, pero agregándole el criterio para determinar cuándo puede considerarse ese aumento apreciable o considerable, cuál es el criterio de razón que uno aplica al juzgar casos notorios y visibles en que uno sospecha y casi tiene la convicción de que ha habido un enriquecimiento deshonesto. Es un aumento desproporcionado con los recursos públicamente conocidos del

interesado. Lo que normalmente ocurre es que cada ciudadano tiene recursos que son conocidos por todo el mundo, los que constan en reparticiones oficiales, en el Registro de la Propiedad, en la Dirección de Rentas, y que el vecindario, los amigos, la policía, fácilmente conocen. Entonces, cuando se observa un aumento patrimonial desproporcionado con esos recursos es cuando recién todos pensamos: este hombre se ha enriquecido con el ejercicio deshonesto de la función pública, aun cuando no sea posible comprobar el acto concreto del cual deriva ese enriquecimiento.

De modo, entonces, que la idea del texto que he proyectado es precisamente dar una forma a ese sentimiento del pueblo, de la opinión, para considerar recién sospechoso a un aumento patrimonial. Nadie considera suficiente para dar un mal juicio sobre un funcionario, el que haya tenido un aumento patrimonial. No hay razón suficiente para considerarlo así, porque puede perfectamente obedecer a orígenes y causas lícitas. Indudablemente, que se le da la oportunidad para que él lo justifique posteriormente, pero entre tanto ha sido sospechado y procesado.

Con el criterio que sustento en el texto que he presentado, es distinta la situación, porque para que pueda haber una intimación o una simple denuncia o acusación fundada sin incurrir en una calumnia, tiene que existir ya ese elemento de la desproporción manifiesta respecto de los recursos que todos conocen, incluso la autoridad, puesto que, como decía antes, lo que normalmente ocurre para cualquier ciudadano es que sus recursos lícitos constan en muchas partes y en reparticiones públicas, de modo que son fácilmente comprobables por la autoridad.

De manera que la necesidad pública de combatir este tipo de enriquecimiento deshonesto queda perfectamente satisfecha, porque no hay ningún obstáculo insalvable para que se justifique, y a su vez la garantía del derecho individual también está cubierta, porque el texto que propongo no da lugar a que cualquier funcionario sea objeto de proceso en base a una imputación notoriamente infundada por no haber elemento de sospecha por aumento desproporcionado de sus recursos lícitos. El texto de la mayoría instituye un delito formal con una pena grave, con una base que me parece insuficiente; porque la sospecha sin motivo serio es lo que encuentro peligrosa para el buen nombre y los derechos legítimos de la generalidad de los ciudadanos argentinos y de los funcionarios, ya que soy un convencido de que en su gran mayoría éstos son honestos y que no se enriquecen en la función pública.

Ese es el concepto que quiero recalcar. Si le agregamos a lo de «apreciable» ese criterio de la manifiesta desproporción con sus recursos lícitos conocidos, ya le damos también al juez y a la autoridad que debe juzgar un elemento

concreto para que aprecie y juzgue las características del aumento patrimonial.

Creo que con ese texto incluso enfocaríamos el elemento básico del delito, lo que fundamentalmente puede constituir una actividad ilícita punible, y respondermos más a la realidad de lo que censura la opinión pública, y también a la realidad de lo que debe ser una figura delictiva de este tipo. Vale decir que recaemos con todo el peso de la disposición penal sobre el aspecto sustancial que es el enriquecimiento, y no sobre el simple aspecto formal del requerimiento no obedecido.

Insisto en ello, señor presidente, dado que no hay término en el texto de la mayoría que consideramos, para que pueda hacerse ese requerimiento posterior a la asunción de un cargo público. Cualquiera sea el número de años que haya pasado, el ciudadano podrá ser requerido para que haga esa justificación, y una simple negativa suya será suficiente para que se lo castigue, porque no hay en el texto proyectado por aquélla nada que indique que hay una limitación en el tiempo para este requerimiento.

Más aún, como manifesté en la sesión de ayer, evidentemente, mientras no haya requerimiento no hay posibilidad de prescripción aunque hayan pasado veinte años, porque la infracción o el delito, tal como resulta del despacho de comisión en mayoría, recién se configura cuando ha existido el requerimiento. Mientras no haya existido no hay delito, no hay prescripción; vale decir, entonces, que es una prolongación indefinida en el tiempo, aun violando así el concepto con que se fijan las disposiciones sobre prescripción penal, para establecer la tranquilidad pública, y una garantía derivada de la conducta del ciudadano afectado y presuntamente delincuente.

De manera que a pesar de la objeción de la comisión quiero destacar que el texto proyectado por la mayoría, aunque bien intencionado, resulta peligroso para la vigencia de derechos perfectamente respetables de los ciudadanos en cuanto a su buen nombre y a la necesidad de no ser comprometidos injustamente en procesos judiciales.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Creía que se había incorporado al texto, pero se ha deslizado un error al final del artículo 268². Entre las palabras «ningún» y «efecto» debe incluirse la palabra «otro». Debe quedar, entonces, «ningún otro efecto». De tal manera que la comisión solamente admite la modificación de «...enriquecimiento apreciable» y la que he señalado ahora.

Sr. Presidente. — Y lo relacionado con la supresión del Código Penal en el artículo 268¹.

Sr. Fassi. — También se puede suprimir la mención del Código Penal luego de las palabras «artículo 256», porque indudablemente la mención se refiere al mismo cuerpo de leyes.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura en forma separada de los artículos 268¹ y 268².

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Artículo 268¹. — Será reprimido con la pena del artículo 256 el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo 268².

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Artículo 268². — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo posterior a la asunción de un cargo o empleo público. La prueba que ofrezca de su enriquecimiento se conservará secreta a su pedido y no podrá ser invocada contra él para ningún otro efecto.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

Sr. Fassi. — Después de la palabra «disimularlo» tiene que haber una coma.

Sr. Fernández. — Así es.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo tal como se ha leído por Secretaría, con la observación del señor senador Fassi en cuanto a la puntuación.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 10.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — Será la última vez que intervengo para proponer modificaciones, señor presidente. Creo que para completar el sentido moralizador que llevan estas sanciones, sería oportuno agregar al artículo 67 del Código Penal, que trata sobre la suspensión de la prescripción, una disposición que diga lo siguiente: «La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y X del título XI, libro segundo del Código Penal, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público.»

Sr. Fassi. — La comisión acepta.

Sr. Flores. — ¿Podría leerse el agregado propuesto, señor presidente?

Sr. Presidente. — Se va a votar en primer término el artículo 10 del despacho, porque la proposición que hace el señor senador Aguirre Lanari es un nuevo artículo que se deberá votar por separado.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura por Secretaría...

Sr. Fernández. — Pido la palabra.

El artículo 10, señor presidente, tiene varios incisos y yo quería hacer una observación...

Sr. Presidente. — Se ha votado en general el artículo 10. Se van a enunciar sus incisos.

—Se enuncia el inciso 1º.

Sr. Fernández. — Señor presidente: observo que en relación con la anterior redacción del artículo 302 del Código Penal se suprimen las palabras «o giros»; y en la actual se dice simplemente «cheques». Entiendo que si bien es cierto que el cheque prácticamente constituye una especie de moneda subsidiaria —y tomo para esto el ejemplo de mi provincia—, el giro es una moneda, un medio de pago, un valor, aun de mayor circulación que el cheque, y se da esta circunstancia idéntica, creo, a la de otras provincias, en especial las que se dedican principalmente a la producción agraria, haciendas, cereales, frutos del país, que remiten por lo general esos productos a Buenos Aires o a otros grandes centros. Habitualmente los fondos correspondientes a las operaciones de venta no se acreditan en cuentas bancarias, sino que el productor se maneja con esas casas consignatarias en base a giros, es decir que éstos tienen una circulación extraordinaria, y desgraciadamente, así como se han producido casos numerosos de cheques sin fondos, lo mismo ha ocurrido con giros. Quiere decir que se crearían, lógicamente, serios problemas a los productores del interior.

Sr. Gamond. — No son giros, son vales.

Sr. Fernández. — La denominación es giro.

Sr. Fassi. — La comisión no acepta, porque entiende que la regulación del cheque es específica.

Sr. Presidente. — ¿La comisión insiste en la redacción actual?

Sr. Fassi. — Sí, señor presidente, insiste en la redacción actual, tal como ha venido de Diputados.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 10, inciso 1º.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Sin observación se votan y aprueban los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 10.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura al artículo nuevo propuesto por el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Secretario (Rodríguez). — (*Leyendo*):

Artículo 11. — Agrégase al artículo 67 del Código Penal, como segundo párrafo, el siguiente: «La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y X del título XI, libro segundo, del Código Penal, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público.»

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo leído.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncia y aprueba el resto del dictamen.

Sr. Presidente. — Queda aprobado. Pasará a la Cámara de Diputados.

Sr. Flores. — Hago indicación de que dicha comunicación se haga inmediatamente.

Sr. Presidente. — Se han tomado todas las providencias para ese fin. Así mismo, se ha notificado a la otra Cámara que de un momento a otro se le enviará la sanción.

4

PRORROGA DE GRAVAMENES ESTABLECIDOS POR LA LEY 16.451

Sr. Presidente. — Corresponde tratar el proyecto de ley en revisión por el cual se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1964 los gravámenes a que se refieren los artículos 1º y 2º de la ley 16.451. Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Rodríguez). — (*Leyendo*):

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

(28 de octubre de 1964)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Prorróganse, hasta el 31 de diciembre de 1964, los gravámenes a que se refieren los artículos 1º y 2º de la ley 16.451.

Art. 2º — La presente ley comenzará a regir a partir del 31 de octubre de 1964.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTURO MOR ROIG.
Eduardo T. Oliver.

Sr. Presidente. — Está en consideración.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Los artículos 1º y 2º de la ley 16.451 prorrogaban impuestos hasta el 31 de octubre del presente año. Se tenía entendido que para entonces podría haberse sancionado el régimen impositivo. Como se ha producido demora en la sanción, es necesario prolongar la vigencia de esos gravámenes hasta el 31 de diciembre de 1964, y ése es el único objeto del despacho que se está considerando. Pido, en consecuencia, su aprobación por la Honorable Cámara.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.